

Movimientos Sociales Urbanos y Problema Regional (Arequipa 1967 - 1973)

Francisco Durand A. N.

LA ESCENA REGIONAL es hoy objeto de una saludable atención por parte de historiadores y científicos sociales, quienes han comenzado a analizar la trama real del Perú como nación en su proceso formativo. Dentro de esta escena regional, una de las dinámicas sociales más interesantes es la que el sur ofrece y, dentro de ella, Arequipa destaca por su rol relevante y distintivo a lo largo de la historia: basta recordar la significancia del liberalismo arequipeño encabezado por Lino Urquieta y Francisco Mostajo a principios de siglo; y la cadena de movimientos sociales frentistas que remecen la dictadura odriísta en la década del 50. ¹ En las décadas siguientes los movimientos tienen más bien un carácter sindical y popular en cuanto a la conducción y base social de los fenómenos de masa.

Es este problema el que queremos ubicar de 1967 a 1974 por ser momentos en que la estructura de la sociedad peruana cruje y se resiente y por ser Arequipa escenario de numerosas y cualitativas movilizaciones. Son estas las razones que nos llevan a escoger el período en cuestión y la escena donde vamos a ver desenvolverse a los movimientos sociales.

Si hay algo que llama la atención al investigador de manera inmediata es el encontrarse con un fenómeno recurrente: en siete años, Arequipa ha sido el escenario de seis paralizaciones del conjunto de la escena urbana. Una en octubre de 1967 y dos en 1968, antes de la caída de Belaúnde. Una en abril de 1972 y dos

en 1973, mayo y noviembre. En todas ellas el eje del movimiento ha sido la organización sindical y su fuerza motora el conjunto de clases y sectores populares movilizados frente a reivindicaciones encadenantes con fuerte impacto político y social en la región y, por momentos, para el conjunto del país. En el transcurso de estos años, el movimiento popular arequipeño ha roto con el esquema de integración regionalista propuesto por la burguesía industrial arequipeña y los sectores medios y se ha consolidado sindicalmente, afianzando su relación con otros sectores sociales dominados.

Frente a estos hechos que hacen relevante el movimiento social arequipeño como objeto de estudio, surgen una serie de preguntas, las cuales intentaremos responder a lo largo de este trabajo:

- ¿Qué explica la vastedad y fuerza de los movimientos sociales expresados en los Paros Generales?
- ¿Qué tipo de contradicciones eslabonan dichos movimientos y cómo se ubican en la sociedad peruana?
- ¿Hasta qué punto y en qué circunstancias es posible hablar de movimiento regional?
- ¿Cómo se relacionan estructura (social) y coyuntura (de movilización) como parte del mismo eje explicativo?

Para responder a estas preguntas nos apoyaremos en nuestra experiencia de investigación, realizada con Narda Henríquez y compartida con un equipo de estudiantes universitarios. ²

MOVIMIENTOS SOCIALES Y PROBLEMA REGIONAL

El Centro de atención de esta investigación es lo que hemos venido denominando “movimientos sociales”. Conviene detenerse un momento y considerar el alcance teórico de esta noción analítica. En primer lugar, no podemos entender los movimientos sociales sin relacionarlos con las clases sociales. Los movimientos sociales remiten a la práctica de determinadas clases sociales o fracciones de clase que se ubican fundamentalmente en la base dominada de la pirámide social. En segundo lugar, los movimientos

sociales son **una forma**, entre varias existentes, de praxis social, pero con la virtud de condensar diversas dimensiones de la problemática de esta praxis. Hablar de movimientos sociales es referirse a una dinámica que remite al carácter de la estructura social, a las expresiones organizativas, a la lucha social. Esto último es lo que le da contenido al movimiento social, pero que no se puede explicar sin pasar por las otras dimensiones mencionadas. Si bien tiene esta ventaja, hay que tener en cuenta que su uso lleva a centrar la atención en los aspectos “movilizadores” de las clases, pudiendo caerse en una fijación óptica en tanto se llegue a descuidar aspectos centrales de la problemática de las clases sociales, como es el de las relaciones de clase en su conjunto.

En tercer lugar, el movimiento social si bien es tomado como el “chispazo” –la acción movilizadora– no debe vérselo aisladamente en el tiempo y en el espacio. Más bien, estos distintos chispazos, por ser condensaciones importantes de la práctica social de las clases dominadas, señalan hitos, que en su conjunto marcan una **trayectoria general** que señala el camino recorrido por el **movimiento popular** : conjunto de movimientos sociales que en determinado período actúan bajo determinados signos que le dan su contenido y especificidad. No está demás repetir que esta trayectoria no es necesariamente ascendente y mucho menos lineal. Afirmar ésto sería caer en el grueso y común error de no considerar a los movimientos sociales como parte de clases en lucha, lucha que arroja resultados no siempre ni generalmente positivos para este movimiento popular. Lo otro es una concepción mecanicista de la cual no está exenta alguna –aunque no toda– la literatura política existente en el país.

Son estas tres aclaraciones las que delimitan las dimensiones y el alcance de una noción analítica como la que usamos. Otra de las aproximaciones conceptuales necesarias está referida a la reciente discusión sobre el problema regional.

En otra ocasión hemos hablado de movimientos sociales regionales urbano-populares.³ Sin embargo, conviene avanzar más allá de una acepción que trata el problema básicamente a nivel de la ubicación geográfica y de connotación peculiar del movimiento. No sólo era el problema de que se produjeran en un ámbito

particular —el sur— sino de que este ámbito tiene algo en común a las distintas localidades y es la de ser un espacio geográfico articulado por circuitos económicos particulares. Para el período y lugar que estamos estudiando, la faz material de este espacio se ha alterado cualitativamente al intervenir el desarrollo del capital y desatar procesos nuevos. Esta intervención se centra en una articulación que combina la dinámica de exportación al mercado mundial con la de desarrollo de un mercado interno. Este último elemento es el que teje una serie de circuitos en el sur y que se han expresado en un fenómeno de urbanización creciente; en flujos migratorios cuyos ejes son Puno y Cusco, siendo los lugares de pasada o llegada Arequipa, Ilo o Moquegua; en la conformación de redes de comercialización basadas en vías de comunicación principalmente terrestres (ferrocarril, carreteras). Este proceso ha sido impulsado por tres factores que pasamos a reseñar:

- i) La consolidación de un núcleo exportador moderno en el sur que reemplaza a la tradicional exportación lanera serrana. Está ubicado en la costa sur y su principal eje es la gran minería del cobre de Toquepala y Cuajone y la actividad primaria industrial en Ilo. Se complementa con la mina de Cerro Verde y el desarrollo de una ligera actividad pesquera en los puertos y caletas del sur: Mollendo, Matarani, Ilo, La Planchada. Este núcleo comienza a desarrollarse en la década del 60 y concluye su montaje en la presente década. Su impacto en la formación del mercado interno sureño es importante por la magnitud del proceso de proletarización y las actividades conexas de las empresas, antes que por la colocación de utilidades o los impuestos que el Estado absorbe. La actitud del Gobierno de Velasco hará que el capital estatal se haga presente como capital productivo (Cerro Verde, Refinería de Ilo) e impulse una mayor integración al mercado interno, al proponer políticas de incremento del consumo de bienes manufacturados nacionales.
- ii) El proceso de industrialización entendido en su dialéctica de producción y consumo. En el sur, la etapa de sustitución de importaciones adquiere connotaciones particulares en

Arequipa al formarse el único Parque Industrial exitoso del país en 1964. Esta industrialización sustitutiva tiene las características típicas de escaso valor agregado y poca absorción de mano de obra, pero produciéndose a escala nacional y no meramente regional como las viejas industrias arequipeñas del 30 (textiles, bebidas, chocolates, licores, etc.). Esta industrialización se complementa con las tres grandes fábricas de la década del 40: la cervecería, SIDSUR y Leche Gloria, cuya lógica de ubicación obedece a la cercanía a las fuentes de materia prima: cebada, leche, trigo. Ello va a implicar una nueva lógica de articulación campo-ciudad, subordinándose el agro al capital industrial luego de un proceso de reordenamiento de la producción agropecuaria. Fuera de Arequipa, el resto del sur presenta un panorama desolador desde el punto de vista de la producción industrial: algunas fábricas pesqueras en la costa, una que otra fábrica en Cusco y Tacna. Como lugar de consumo urbano la región sur sí presenta nuevos rasgos. Se han formado nuevos ejes comerciales, como es el caso de Juliaca y los sectores urbanos y, en menor medida, campesinos se han venido integrando al consumo industrial. A su vez, el agro se ha dirigido cada vez más a proveer de alimentos a las ciudades, mercantilizando sus productos.

iii) Por último, el proceso de intervención del Estado en lo formacional nacional acorde con las tendencias del desarrollo capitalista.

El Estado en los años 60 y 70 ha ido interviniendo cada vez más en una serie de aspectos, y principalmente en los aspectos del desarrollo regional. Este es el resultado de la fijación de prioridades e intereses nacionales de acuerdo a la tipicidad de la hegemonía del bloque en el poder y, a la vez, de una presión de las clases sociales ubicadas en la región que claman por la atención estatal a los "pueblos olvidados". Así, se han construido industrias de fertilizantes en el Cusco, se han hecho obras militares en Tacna y Arequipa, puentes y carreteras, aeropuertos y escuelas, frigoríficos y municipalidades. Junto a ello, grandes proyectos de desarrollo regional se han empezado a implementar: el plan COPESCO de desarrollo turístico del

circuito Puno—Cusco, el plan hidroeléctrico y agrícola del Majes, los planes de crear polos integrados de desarrollo industrial en la frontera con Chile, etc. El Estado, con la participación o no de las clases dominantes locales, se ha convertido progresivamente en una instancia clara de propulsión del mercado interno, de integración de los espacios regionales y, a su vez, de éstos con el espacio nacional.

Ahora bien, todo ello nos conduce a ver históricamente el lado dinámico de la escena regional sureña, que, a partir de la década del 60, entra en el proceso de mutación antes descrita. Es evidente que el sur no es el mismo de antes y que en el futuro va a continuar cambiando sobre la base de los procesos que hemos visto. Ello no quiere decir, no obstante, que este desarrollo sea homogéneo. Al contrario, es un desarrollo desigual por estar enmarcado en una lógica de desarrollo capitalista y por estar moldeado por el imperialismo. El Estado es el que asegura y reproduce este desarrollo desigual al proteger dicha lógica de acumulación y, a la vez, se encarga de redistribuir las rentas de acuerdo a sus planes y atender las demandas regionales, siendo así un elemento que “arbitra” las consecuencias que emanan del desarrollo desigual.

Tradicionalmente, la región sur se ha caracterizado por tener tanto un perfil⁴ como una personalidad local propios encarnando Arequipa una ideología regionalista con un alto nivel de organicidad. ¿Qué explica esta corriente regionalista? ¿Dónde se encuentra el origen de su fuerza integradora?

Si partimos del supuesto que las regiones se desarrollan desigualmente en tanto esto obedece a una lógica de acumulación capitalista e imperialista que privilegia determinado tipo de expansión productiva y de ubicación espacial; si la estructura política nacional —el Estado— es el elemento que origina y reproduce esta situación partiendo de la base de una concepción centralista, de absorción de poderes y de manejo de las decisiones, el regionalismo entonces se entiende como la expresión de esta contradicción en el plano ideopolítico.

Para el caso de Arequipa dicha corriente adquiere connotaciones

particulares, por el papel histórico y cultural jugado en períodos anteriores que se han sedimentado en la conciencia regional actual. Pero, en lo fundamental, las exigencias del desarrollo regional actuales tienen un mismo origen, parten de una misma contradicción de base: el desarrollo desigual. Ahora bien, conviene preguntarse cómo se relaciona este problema con la dinámica de las clases sociales a nivel local y regional.

CONTRADICCIONES DE CLASE Y MOVIMIENTO SOCIAL REGIONAL

La dinámica de los movimientos sociales regionales se distingue por estar inmersa no sólo en la contradicción entre capital y trabajo, sino también en los que emanan del desarrollo desigual. La primera lleva a una activación de las organizaciones y sectores sociales que reclaman por condiciones de trabajo, salario, derechos sindicales o problemas del consumo colectivo. Hasta aquí no hay diferencias sustantivas con lo que puede suceder en otro ámbito, el capitalino por ejemplo. La segunda supone un mayor espectro social presente directa o indirectamente en la movilización que le da una connotación regional particular, que incluye, en determinadas circunstancias, una presencia activa de la que podemos llamar la clase dominante local. Esto es lo específico del movimiento social regional que, de acuerdo a sus distintas manifestaciones, puede tener un carácter "clasista" o "regionalista" según el tipo de conducción que tenga.

El Perú es un país en donde, a partir de la década del 50, la desigualdad regional y el hipercrecimiento capitalino se presentan con mayor nitidez que en otros países de América Latina. Este elemento, como hemos señalado líneas arriba, se relaciona con el centralismo político-administrativo. Las provincias, y particularmente las ciudades, una vez que están envueltas en el lento, contradictorio, pero persistente crecimiento del mercado interno, son sede de nuevos sectores sociales articulados al comercio, la distribución, los servicios y una producción industrial en pequeña escala. Van surgiendo así nuevos tipos de asalariados y una capa dominante numéricamente pequeña y con bases de

acumulación no sólo limitadas sino con pocas posibilidades de expansión.

Poco a poco, estos sectores y clases sociales nuevos, de acuerdo a las características y circunstancias de cada región o localidad, van tomando la iniciativa política y el comando de las clases y sectores sociales con los cuales están relacionados y que forman parte de su base dominada. Esta iniciativa se manifiesta en la exigencia al Gobierno (visualizado como "Lima" en la conciencia ordinaria y popular) de que el Estado coloque mayores rentas para su localidad o región con el objeto de promover un desarrollo regional más intenso que a su vez, permita ir ampliando sus bases de acumulación. Este proceso, a su vez, está regido por circunstancias históricas peculiares donde el tipo de sistema político puede o no permitir "representantes locales" dentro de su propio aparato que hacen las veces de mediadores de las demandas de desarrollo regional.

En circunstancias en que no hay conexiones formales con el Estado, donde éste no realiza labor alguna de tipo regional y siendo infructuosas las iniciativas locales, un camino posible y potencialmente efectivo es el de aliarse al movimiento popular o ponerse a la cabeza de él, para que apoyado en la fuerza de la masa dada la debilidad numérica y económica de la clase dominante local— presione al Estado y lo obligue a satisfacer las reivindicaciones locales.

Cuando la clase dominante local tiene capacidad de iniciativa, esta "lucha" será un elemento central de integración de clases a nivel local, donde el conjunto del espectro social se una y actúe conjuntamente para arrancar las reivindicaciones del desarrollo. Esta lógica de movilización se da a nivel local fundamentalmente, donde las respectivas clases dominantes de una región compiten entre sí para arrancar al Estado concesiones y ven la forma de no estar subordinadas a otras instancias de poder regional.⁵

Cuando hay un desarrollo cuantitativo y cualitativo de las clases populares, y particularmente de aquellos sectores con capacidad de organización sindical, y en circunstancias donde las reivindicaciones sindicales y populares son el eje del movimiento,

menores son las posibilidades de conducción de la clase dominante local y mayores las posibilidades de coordinación regional para que las distintas organizaciones sindicales y populares locales de cada región se unan para presionar al Estado y/o al capital para que satisfaga sus exigencias. De allí que el carácter del frente regional puede variar de acuerdo a la posición hegemónica o secundaria de la clase dominante local.

Visto el problema desde el Estado (o desde "Lima", si se quiere), las demandas regionales son un problema político importante y representan objetivamente una oportunidad de mediación en la cual puede tener cierta capacidad de iniciativa —de acuerdo al momento del ciclo económico por el que se está atravesando— y en donde se puede jugar con las distintas reivindicaciones, satisfaciendo unas y dejando de lado otras. Asimismo, podrá tener la oportunidad de ir separando las reivindicaciones sindicales y populares de las regionales como medio de apagar el incendio social.⁶ El hecho de que el conjunto de clases actúe en una misma acción colectiva se debe también a que el Estado, cuya sede geográfica es Lima, es el que tiene el monopolio en la toma de decisiones tanto para satisfacer las demandas de desarrollo regional como para fijar el salario mínimo, repatriar a los deportados o liberar a los detenidos. Este problema, evidentemente, se agudiza cuando no hay representación formal de las regiones y localidades y donde el Estado interviene a través de sus aparatos, centralizadamente, para resolver estos problemas. Es el caso del SINAMOS que absorbe organismos regionales y desarrollo y a la vez busca mediar y neutralizar las demandas populares.

El problema visto nos lleva necesariamente a ubicar el tipo de contradicciones y la manera como ellas están enlazadas. A nivel regional ubicamos entonces tres órdenes de contradicciones sociales cuya expresión serán las reivindicaciones:

- a) Las demandas de desarrollo que integra al conjunto del abanico social regional.
- b) El enfrentamiento entre el Estado y las clases dominadas al fijar el primero las leyes referentes a sus derechos y libertades.

c) La contradicción entre la clase dominante local y su base dominada.

En los paros locales, fenómeno común en el Perú desde 1973 a la actualidad, generalmente se han enlazado las dos primeras contradicciones, produciéndose en la práctica una alianza entre la pequeña y mediana burguesía local, los sectores medios y la base dominada contra el Estado. Esta contradicción se da, evidentemente, con los sectores hegemónicos de la burguesía cuando el Estado está en relación directa con ellos.

Este enlazamiento ha supuesto en algunos casos una conducción de la clase dominante local pero apoyada en el sindicalismo que le da la fuerza de negociación.⁷ En otros, sobre todo en los últimos seis años, la conducción ha sido sindical y popular y han estado en primer plano los problemas laborales, de derechos sindicales y los problemas del consumo colectivo. Cabe anotar que este enlazamiento no supone una coordinación absoluta ni un mando único. Sobre la base de la unidad forjada se van dando tensiones en la conducción del movimiento.

AREQUIPA: OCTUBRE DE 1967 A MAYO DE 1973. DEL FRENTE REGIONAL AL FRENTE DE CLASES

Hasta ahora hemos dado aproximaciones generales para entender fenómenos cualitativamente nuevos de la dinámica de clases sociales urbanas en la escena regional, que se han presentado con mayor nitidez en la última década. Resta tan sólo entrar al análisis de una situación concreta en base a los estudios sobre la dinámica de clases y los movimientos sociales en Arequipa, de octubre de 1967 a mayo de 1973.

Dado que intentamos hacer una síntesis, utilizaremos como herramienta de ordenamiento una periodización de la dinámica de relaciones de clase, partiendo del criterio de ubicar aquellos momentos en que se producen cambios o alteraciones sustantivas de esa trama concreta de relaciones de clase y relaciones políticas de clase a nivel de la escena regional arequipeña. No está demás

insistir en que el trabajo intenta aportar en el análisis de la problemática urbano-regional fundamentalmente, sobre la base de una etapa en que se va pasando del frente regional de clases al frente clasista.

1967-1971. OCASO DEL FRENTE REGIONAL DE CLASES

En la crisis de 1967-68 las relaciones de clase en Arequipa mostraban un resquebrajamiento del frente regional de clases, forjado en el pasado sobre la base de unidad en torno al proyecto de desarrollo industrial regional propuesto por la burguesía arequipeña y los sectores medios profesionales imbuidos del desarrollismo entusiasta de la década del 60.

La década del 60 es una década que comienza con la elaboración de dicho proyecto a partir del organismo regional creado por Prado luego del terremoto de 1958: la Junta de Rehabilitación y Desarrollo de Arequipa (JRDA)⁸ Este organismo, controlado por la clase dominante local, se convierte en el eje organizativo e infraestructural a partir del cual se impulsan grandes proyectos de desarrollo regional con el objeto de ampliar las bases de acumulación. Con la llegada de Belaúnde al poder, en parte gracias al masivo voto sureño, se produce por primera vez un nexo sólido entre el bloque dominante arequipeño y el poder central. Esta relación orgánica permite crear un marco legal adecuado y atraer inversiones estatales con el objeto de formar un polo regional de desarrollo basado principalmente en la industria y aplicando el esquema de industrialización sustitutiva de importaciones. En 1964 se crea la Ley de Parques Industriales (DS 95-H, 5 de junio de 1964) y pronto se inicia la construcción del primero y único proyecto exitoso de desarrollo regional durante el belaudismo.

Con la puesta en marcha del proyecto, la clase dominante local va a lograr una momentánea legitimación frente a los sectores sindicalizados, a quienes les propone una "tregua sindical" buscando a la vez generar en ellos una "mística del desarrollo". Esto se refleja en el nuevo liderazgo pro-populista de la Federación

Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA) (III Congreso, marzo de 1964). De otro lado, se busca crear nexos orgánicos con los "nuevos arequipeños" que desde 1957-58 vienen migrando de Cusco y Puno principalmente. Los "sin techo", como eran llamados, fueron organizados bajo sistemas de ayuda mutua y con apoyo técnico de la JRDA. La Asociación de Urbanizaciones Populares de Arequipa (AUPA) pronto fue dirigida por líderes de definida orientación belaundista, como fue el caso de Choquehuanca. Así, con tregua sindical y asistencialismo barrial se va consolidando la etapa en que la clase dominante local se legitima frente a su base dominada y la incorpora a su proyecto,⁹ aprovechando la solidez de relaciones con el gobierno de esa época.

Este diagrama de relaciones, que se podría denominar políticamente Frente Regional de Clases, entra en un lento proceso de descomposición al iniciarse un cuestionamiento por parte del movimiento sindical y del movimiento universitario que entran en una fase de radicalización y denuncia. Ya en 1966 la dirigencia de la FDIA está fraccionada en dos líneas: la "populista" de Guillermo Rendón Ampuero y la "clasista" de Miranda que constituye un Comité Coordinador. Este fenómeno tiene evidente relación con los cambios de estrategia del sector sindical, a nivel nacional, opuesto a la conducción aprista de la Central de Trabajadores del Perú (CTP), que se expresa en la aparición del Comité de Defensa de la Unidad Sindical (CDUS), liderado por el Partido Comunista Peruano (PCP).

Hacia 1967, tanto la crisis económica como la deslegitimación del sistema democrático van a ser el marco donde se produzca el inicio de la ruptura del frente regional de clases. En ello incide también el poco efecto que a nivel del empleo tiene la industrialización regional, y el progresivo crecimiento de sectores populares urbanos ubicados en las llamadas "urbanizaciones populares", que, con distintos niveles de relación con el aparato económico, se encuentran con dificultades crecientes de obtener empleo estable e ingresos mínimos para satisfacer sus niveles de consumo.

El paro del Frente Unico de Defensa de la Economía Popular de Arequipa en 1967 (FUDEPA) va a marcar el inicio efectivo de la ruptura con la clase dominante local y su proyecto de integración social desarrollista.

A partir de la devaluación de la moneda en un 400/o en setiembre y la congelación de los haberes de los empleados públicos, serán los sectores "clasistas" (PCP y Nueva Izquierda) quienes impulsarán las movilizaciones y los mítines, tomando la iniciativa y señalando el camino a seguir por la protesta sindical y popular: el paro general. Cuando el movimiento comienza a cobrar amplitud y ante el peligro del desborde de las dirigencias, el sector pro-populista va a retomar la iniciativa formando un Frente Popular amplio, en tanto la FDTA aparece dividida. Dicho Frente estará comandado por el dirigente Guillermo Muñoz, del gremio de choferes, y logra una rápida adhesión de cerca de 160 organizaciones sindicales y populares.¹⁰ El FUDEPA entonces será la organización conductora y a su interior se manifestará la tendencia emergente y aspirante al liderazgo popular.

Fracasadas las negociaciones con el Gobierno, que cede un tanto al dar un aumento del 100/o de sueldos y salarios, el FUDEPA camina rápidamente al paro general, que se concreta el 19 de octubre con una plataforma reivindicativa básicamente dirigida a problemas de aumento salarial y control de precios (ver Cuadro 4).

El paro del FUDEPA dura del 19 al 26 de octubre y se caracteriza por un alto nivel de paralización urbana y fabril, así como por un fuerte impacto a nivel regional y nacional. El 22 un Frente laboral de Mollendo y Matarani inicia un paro de 24 horas que culmina exitosamente. El Frente Unico de Juliaca y el Frente de Defensa del Pueblo del Cusco también deciden dar su apoyo a las luchas de Arequipa. A nivel nacional se condensan las expectativas laborales en la lucha de Arequipa, en tanto se espera conseguir un aumento general de sueldos y salarios y no sólo un aumento a nivel regional.

En el curso del paro, el Gobierno, a través de la mediación del Concejo Provincial, irá cediendo al conceder otros aumentos (DS

011) y, a la vez, irá presionando con la represión al suspender las garantías y encarcelar a aquellos sectores con mayor nivel de movilización y radicalización. En medio del paro será interesante anotar que se condena a la Célula Parlamentaria Arequipeña como “traidores” a la causa sindical y popular en tanto se les conmina infructuosamente a actuar de mediadores en el conflicto. El día 26, frente a las ofertas del Gobierno ya mencionadas y ante la imposibilidad de arrancar mayores reivindicaciones, la dirigencia del FUDEPA acordará levantar el paro. A esta decisión, que cuenta con 48 votos a favor, se opondrá el sector Miranda de la FDTA, que con 14 votos propone continuar el paro. Ello muestra las limitaciones que aún tiene la fuerza “clasista” emergente.

El juego de oposiciones que se da en esta importante movilización muestra un enfrentamiento de las masas populares con el Gobierno antes que un conflicto con “la patronal” lugareña. Sí encontramos una tensión interna por denunciar el carácter antipopular de los intermediarios políticos arequipeños, pero en lo fundamental la burguesía industrial se mantiene un tanto al margen del problema y ello es explicable. La Cámara de Comercio e Industria (CCIA) busca lograr un aumento salarial no a nivel regional (pues aumentarían sus costos), sino a nivel nacional y, en ello, se enfrentaba a la posición de los agroexportadores, quienes no podrían transferir un aumento de los salarios a los precios de sus productos. En realidad la Prefectura de Arequipa juega un papel doble en ese sentido, en tanto entiende que el paro es necesario para presionar al Gobierno con un aumento salarial y, a la vez, no puede dejar de actuar en su papel oficial. A partir de ella se mantienen importantes contactos con la dirigencia del FUDEPA, buscando frenar el ascenso del sector “clasista” 11

Es por estas razones que planteamos que se inicia el proceso de ruptura y no que éste es ya un hecho definitivo. Arequipa aún sigue envuelta en el esquema de relaciones de clase anterior, pero será el sindicalismo comunista quien, gracias al papel activo y movilizador que cumplió en el paro, cobra fuerza y logra reconquistar el gremio departamental, la FDTA, hecho que se concreta en el IV Congreso (21-23 de julio de 1968).

Antes de suceder este hecho, en mayo, se producirá un paro de transportistas, quienes rechazan un aumento de multas e infracciones al tránsito, yendo a un paro del 6 al 8 de dicho mes en protesta por tales medidas. En su desenlace exitoso contribuirá Lino Martínez (AP), senador obrero de Arequipa, quien trata de retomar el papel de mediador con cierto éxito.

Una vez tomada la dirección del FDTA, liderada por Cuba Escobedo de la Federación de Empleados Bancarios (FEB) (quien ganó las elecciones derrotando a Guillermo Muñoz, exdirigente de FUDEPA), se visualizan nuevos rumbos a nivel sindical. En primer lugar, se busca coordinar con la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP) y, complementariamente, se va elaborando una plataforma reivindicativa que choca con la política económica del régimen. Dos meses después del Congreso, la FDTA —bajo nueva conducción— estrenará su línea “combativa” al decidir un Paro General en apoyo a una huelga nacional de choferes que se produce del 19 al 23 de agosto, sin obtener ninguna reivindicación. En Arequipa los choferes acatan la medida, siendo despedidos algunos dirigentes. Este hecho servirá de detonante para el paro de la FDTA, quien lo concreta el 26 tratando de darle un contenido reivindicativo más amplio al proponer como primer punto el alza del costo de vida (ver Cuadro 4). El paro, sin embargo, no encontrará eco en las bases sindicales y la nueva dirigencia se verá obligada a lanzar una tregua en donde sólo consigue la suspensión de los despidos y la no intervención policial en los locales sindicales.

La ruptura del frente regional de clases aún no llega a adquirir perfiles muy definidos en tanto el enfrentamiento con los mediadores no es completo ni aún se logra construir una sólida alternativa sindical. Este proceso quedará truncado en parte por el vuelco político que sufre el país con el golpe del 3 de octubre de 1968.

El proceso de ruptura que hemos venido analizando queda a mitad de camino en tanto se alteran los nexos entre el gobierno y la clase dominante local y es el Estado quien diseña cambios sociales y nuevos modelos de desarrollo, quedando desdibujado el proyecto regional ante la iniciativa estatal. De otro lado, se va a

intentar montar un nuevo diagrama de relaciones de clase tratándose de incorporar a los sectores sociales a una estructura estatal de dominación política, sobre la base de la legitimación inicial que logra el Gobierno con sus primeras y más radicales medidas.

Las reformas en Arequipa tienen un impacto importante a nivel agrario e industrial. En el primer caso, al afectar los intereses de capas latifundistas en un primer momento que, cabe aclarar, no forman parte del sector más importante de la clase dominante local. Un segundo momento se dará al ponerse en peligro las propiedades de pequeños y medianos propietarios, quienes resistirán fuerte y eficazmente a la ofensiva del Estado. A nivel industrial, el impacto será fuerte en la medida en que la nueva ley de industrias (DL 18350) eliminará de golpe los instrumentos altamente promocionales de la Ley de Parques Industriales, y creará la Comunidad Industrial como cuerpo participatorio autónomo al interior de la propia empresa. Frente a estos hechos, que alteran de manera importante la situación para la clase dominante local, tratará de diseñar una estrategia común a nivel local de defensa del proyecto regional autónomo en base a tres reivindicaciones:

- a) Defensa de la Ley de Parques Industriales
- b) Defensa de la JRDA (en peligro de ser absorbida por SINAMOS)
- c) Defensa del proyecto Majes.

En 1970 los gremios patronales locales movilizarán a la "opinión pública" e incluso tratan de incorporar a la FDTA en la defensa del proyecto regional. Sin embargo, en lo fundamental será una movilización de la burguesía y sectores medios que, representados en la figura del alcalde, viajan a Lima a entrevistarse con Velasco. El resultado de dicho encuentro será el que el Gobierno separa las reivindicaciones y sólo acoge la que mayor impacto popular tiene: el proyecto Majes, dejando las otras dos restantes sin solución.

Cerrada la posibilidad de hacer una defensa de conjunto del proyecto regional y teniendo en cuenta el proceso de enfrentamiento industriales-Gobierno a partir de la radicalización

de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la CCIA, sobre la base de la industrialización sesentista, se va a articular a dicho gremio a nivel nacional. ¹² A nivel local quedará tan sólo a su cargo el Concejo Provincial, instancia a través de la cual se va a buscar dinamizar la actividad económica promoviendo el turismo, abriendo un campo posible de acción a capitales deseosos de escapar del marco de las reformas. De otro lado, la acción de los partidos va a quedar relegada, parapetándose éstos tras los gremios patronales y los colegios profesionales. Sólo a nivel de los pequeños y medianos propietarios se articulará un sector aprista y belaundista con gremios "populares".

La acción del Estado, que incorpora la JRDA al SINAMOS, va a centrarse en ganar adhesiones en el campo de los pobladores, quebrando la influencia de la Iglesia y el belaundismo. Pronto la AUPA va a ser controlada por el SINAMOS. Más lento y poco exitoso será el intento de penetración a nivel sindical y en donde se encuentren con la resistencia del sector "clasista", quien será el eje del enfrentamiento de las masas populares urbano-regionales con el Estado.

Del lado popular, de 1969 a 1971, a nivel del movimiento obrero y sindical, se van a dar una serie de procesos, expresión de lo que sucede a nivel nacional, en donde el magisterio y los universitarios, principalmente, entran en una dinámica crecientemente violenta de enfrentamiento al Gobierno de Velasco. En 1971, Arequipa será la sede de la II Convención de Maestros, en donde, debido a los resultados de la huelga de ese mismo año, acuerdan desafiliarse de la CGTP y constituir los Sindicatos Unicos de Trabajadores en la Educación (SUTE). La posición de los sindicatos frente al Gobierno va a constituir el elemento central de diferenciación. A nivel universitario la Federación Universitaria de Arequipa (FUA) entra en una dinámica de radicalización y enfrentamiento al Gobierno contra la ley universitaria (DL 17437), siendo liderada por el Partido Comunista del Perú "Patria Roja" (PC del P-PR), grupo que también ejerce influencia en el nuevo gremio magisterial.

Para el movimiento obrero y la FDTA el proceso toma otro cauce. El PCP logra asumir plenamente la dirección de la FDTA, al

desplazar a Cuba Escobedo y poner a la cabeza al dirigente Sobenes, de Leche Gloria. A través de la FDTA se solidifica el nexo con la CGTP y la línea de apoyo al “Gobierno Revolucionario” irá asentándose progresivamente. La FDTA, pivote del movimiento sindical arequipeño, contará con una nueva correlación de fuerzas: como tendencia hegemónica el PCP sólidamente asentado en la directiva de la Federación; como tendencia emergente y radical la Nueva Izquierda irá ganando bases, sobre todo en los nuevos sindicatos del Parque Industrial y mostrará capacidad de iniciativa en la lucha reivindicativa contra el Gobierno. Como tendencia rezagada quedarán los sectores desplazados en la década del 60 que antes lideraban el FUDEPA: choferes taxistas y ferrocarrileros (afiliados a la CNT).

La creación de la CTRP en 1972, gracias al apoyo estatal, va a marcar la presencia de un sindicalismo paralelo impulsado por el Estado, con escasa influencia y muchos recursos,¹³ pero que tendrá algunas implicancias en la organización de sindicatos en sectores no productivos y empresas de pequeño y mediano capital.

1972–73: FORTALECIMIENTO SINDICAL Y LUCHA POR LA FORMACION DEL FRENTE POPULAR

Alteradas las relaciones del Estado con la burguesía local, rota la articulación entre ésta y los sindicatos al fracasar la defensa del proyecto regional, la dinámica de relaciones de clase y los puntos de mayor fricción se van a tejer en torno a la relación movimiento popular y Estado, y la dinámica de enfrentamiento de líneas alternativas para la conducción del movimiento sindical y popular que parte de distintas “caracterizaciones” de la naturaleza de clase del Estado.

Estos problemas característicos del período que analizamos se van a manifestar tanto en los paros generales (abril de 1972, mayo de 1973, noviembre de 1973), como en los eventos de organismos populares. Mientras estos hechos se suceden y marcan la escena regional, se va desenvolviendo otro proceso menos público y más silencioso, en donde se enfrentan los sectores de la burguesía

industrial con el Gobierno, a partir del frente nacional de gremios patronales que es la SNI.¹⁴

En abril de 1972 se va a inaugurar la dinámica de movimientos sociales que enfrenta al Gobierno Revolucionario con las masas populares. Dos son las reivindicaciones eje: el problema de los despedidos de Cuajone y el problema magisterial. En el caso de Cuajone se trata de obreros de construcción civil, provenientes del sur en su conjunto, que trabajan para una subsidiaria de la empresa norteamericana Southern (SPCC) y que reclaman estabilidad laboral frente a los despidos de la Utah Construction en febrero de 1972.

Frente al despido, los obreros de Cuajone desarrollarán diversas medidas de lucha que se ubican a nivel de Moquegua. En un segundo momento, el problema se va extendiendo y toca a Arequipa, al realizarse una marcha de sacrificio a esa ciudad, e iniciar un proceso de relación y coordinación con sindicatos y organismos populares, tejiendo en la práctica la solidaridad sindical frente al problema del despido. El mes de marzo transcurre con movilizaciones y mítines, marchas y colectas, sin resultados. Poco a poco, es notorio que sólo una acción de conjunto y no sólo sectorial logrará posibles resultados. Ello indica cómo en la escena regional los paros sectoriales, al ser pocas empresas, no tienen fuerza de negociación; de allí que sólo esta unidad de conjunto obligue al Estado y al capital a considerar la posibilidad de solucionar las reivindicaciones.

Junto a ello, el problema magisterial se agudiza al producirse traslados de maestros a lugares apartados (RD 5124, marzo de 1972) y mantenerse la deportación de dirigentes nacionales. Las contradicciones se van agudizando y van a llegar a constituir elementos movilizados. Los problemas se refieren a los derechos sindicales antes que a salarios, cabe anotar.

Tanto los mineros como el magisterio entran en contacto con la FDFA, quien, sin ser sus afiliados, acoge sus demandas.¹⁵ De otro lado, las bases presionan a la dirigencia a tomar medidas de lucha y que consideren problemas de los sindicatos afiliados. La gama de reivindicaciones se va tejiendo (ver Cuadro 4). Al no encontrar

respuesta del Gobierno, la FDTA decide ir al Paro General el 7 de abril. El impacto del paro es inmediato y el Gobierno opta por la negociación. El mismo 7 de abril llega el Ministro de Trabajo –en tanto sólo la autoridad central toma decisiones de esa naturaleza.¹⁶ La “fórmula” de negociación del Ministro – que no contempla el problema magisterial “por no ser de su incumbencia” y no da real solución a Cuajone – es rechazada y el paro continúa. Cabe señalar que los comunicados del magisterio son notoriamente más agresivos que los de la FDTA, que más bien –por la conducta que tiene– cumple un rol mediador sobre la base de la paralización existente, pero mediador a fin de cuentas. Resulta interesante señalar que el Colegio de Abogados dará su respaldo profesional a maestros y mineros, criticando las fórmulas presentadas. Mientras tanto el paro sigue en pie y la FDTA se vuelve a sentar en la mesa de negociaciones el 19 de abril. Esta vez el Ministro de Trabajo llega de Lima nuevamente y lo acompaña el Vice-ministro de Educación, quien se niega a derogar la RD 6124 y busca dar soluciones a nivel regional. Sin embargo, al final cederán al quedar sin efecto los traslados de la región y se estudiarán los casos a nivel nacional, siendo también repatriados los dirigentes deportados. A nivel minero se impone la reubicación, previo pago de salarios y beneficios sociales. Las otras reivindicaciones han sido solucionadas. El paro, pues, ha sido exitoso y muestra la disposición del Gobierno a negociar con la oposición popular “clasista”, que ya comienza a adquirir perfiles definidos no sólo en paros sectoriales (mineros, maestros), sino regionales. Es importante anotar que el eje del paro no es aún un problema del proletariado arequipeño. En el caso de los mineros, el enfrentamiento es con el capital extranjero y se obliga al Estado a mediar en el conflicto; en el caso de los maestros, el Estado es un “Estado-patrón”. Hasta aquí, los polos del conflicto no llegan a enfrentar directamente al capital regional.

Es por ello que la CCIA en este paro, como en los próximos, “no aparece”, salvo para reclamar con cierto énfasis la vuelta al trabajo.¹⁷

Luego del paro de mayo se van a dar importantes pasos a nivel gremial. El movimiento magisterial, que viene en activación

constante desde el paro de 1971, va a concretar su nueva forma organizativa al crearse el SUTE--Arequipa, hacia fines de 1972. Aumento de salarios, reconocimiento oficial del SUTE, rechazo a las represalias del Estado. Estos son los tres elementos centrales en la movilización magisterial, caracterizada por su tenacidad e intensidad. La dirigencia básicamente maoísta logrará establecer nexos sólidos con sus bases, apoyados en su línea de defensa combativa de los derechos sindicales. Esta misma tendencia tendrá un período de larga hegemonía en la FUA, donde el FER--Pekinés representa la fuerza más gravitante del movimiento universitario. La penetración de la llamada línea "ultra" a nivel sindical será más lenta, igual que en el caso de los pobladores donde aún se encuentran al margen del movimiento sindical por estar controlados por el SINAMOS.

El otro suceso importante lo constituye el V Congreso de la FDTA (29 al 1o. de julio de 1972), en donde se destacan las mociones de apoyo a las reformas del Gobierno y los intentos de "profundizar" las nacionalizaciones, evidencia del buen trabajo político realizado por el PCP en las bases obreras y sindicales. Sólo en el tema de la unidad obrera y las líneas sindicales se visualiza la oposición de izquierda a su interior, y ello se muestra en las pugnas por elegir al Ejecutivo. David Sobenes saldrá reelegido y la mayoría de cargos los coparán dirigentes de su línea pro-PCP, quedando la oposición en las bases.

Sobre esta decantación de líneas político-sindicales se va a definir el problema interno del movimiento social arequipeño en el transcurso de los paros generales, prueba de fuego de las formulaciones programáticas partidarias.

Un año después del paro de abril de 1972 se va a presentar otro conflicto cuyas raíces son las mismas: el problema de los trabajadores de Cuajone. Esta vez son 450 obreros despedidos por Graña y Montero, empresa que los contrató el año anterior por mediación estatal. Frente al despido, y contando con la experiencia anterior, los trabajadores organizados en el sindicato de Cuajone van a presionar al Gobierno para que la firma Peruvian Associates los contrate respetando salarios y categorías y reconociéndose el sindicato (RD 037-73-TR). Cuando el 5 de

febrero los trabajadores se presentan a las puertas de la empresa, ésta los rechaza aduciendo haber apelado a la resolución. Nuevamente, el proletariado minero y ligado a las minas está en movilización nacional, proceso que culmina en la expulsión de varios dirigentes del PCP (Víctor Cuadros, Ricardo Díaz Chávez) y la separación de la Federación Minera de la CGTP. Los problemas de “autonomía de clase” y “centralización sindical” cobran aquí un peso específico en el movimiento obrero y, para el caso de Cuajone, se van a manifestar en movilizaciones y marchas que culminan, por segunda vez, en la ciudad de Arequipa.

La FDTA, en tanto nuevamente se reconstruye la solidaridad con las bases sindicales obreras y organismos del magisterio y la universidad, actúa nuevamente de mediadora pero enfrentando una situación en la que la empresa contratista se opone a la solución estatal, y ésta se ve con un terreno de negociación sindical mucho más estrecho que en relación al año anterior. Los intentos por hacer valer la RD 037 no serán positivos y la solución que se ofrece de recontratarlos en otras obras, dispersos los trabajadores y en peores condiciones de trabajo, será firmemente rechazada por el sindicato dirigido por Hernán Cuentas. Hacia abril, el sindicato acuerda “agotar las medidas de orden sindical más extremas” para hacer valer la RD 037, “solicitando el apoyo solidario de los trabajadores de Arequipa”¹⁸

Mientras esto sucede, el Gobierno inaugura el local de la CTRP-Sur, que luego del rápido y artificial crecimiento, sale a la luz por primera vez, haciendo patentes los reclamos del V Congreso sobre la unidad obrera en torno a la independencia sindical frente al Gobierno.

El elemento detonante del paro será la prisión y posterior deportación de Hernán Cuentas a la salida del Ministerio de Trabajo de Lima, cuando estaba en compañía de delegados de la FDTA.

Dicha medida represiva se va a producir cuando la ciudad de Moquegua —el centro urbano más cercano a Cuajone— se encuentra paralizada ante la medida de un Frente que engloba a maestros, pobladores y obreros. La gama reivindicativa incluye,

además del pedido de solución a los trabajadores de Cuajone, demandas de funcionamiento de la escuela normal mixta y la construcción de la carretera Ilo—Moquegua—Desagüadero—La Paz, proyectada y no realizada. Así, junto al problema laboral se manifiesta una demanda regional.

La detención de Cuentas, justificada por ser éste un “político”, en lugar de frenar el movimiento lo impulsará hacia adelante con fuerza. Este hecho, cabe anotar, se produce en medio de un paro en Moquegua, siendo decretada posteriormente la suspensión de garantías por parte del Estado. Deportado Cuentas, el Gobierno centra sus esperanzas en negociar un acuerdo de recolocación contando con la angustia económica de las bases y su necesidad de trabajo. Se equivoca, sin embargo, en su evaluación, en tanto la FDTA y el Sindicato de Cuajone rechazarán la oferta y condenarán la actitud del Gobierno que lesiona los derechos sindicales. La estabilidad laboral es el principal problema.

El 24 de abril, la FDTA, en asamblea de bases, acuerda dar plazo de 72 horas antes de ir al Paro General, y el 1.º de mayo, el Día del Trabajo, se anuncia en el mitin la plataforma reivindicativa que tiene como principales puntos la repatriación de Cuentas, la solución al problema de Cuajone y la estabilidad laboral de trabajadores de DINSUR y Zona Agraria IV.

La FDTA se ve así envuelta en una nueva jornada de movilización, donde la dirigencia se ve obligada a conducir la lucha ante la presión de las bases, en donde actúa el sector radical “clasista” y en donde tiene como enemigos a los “desplazados” luego del paro del FUDEPA. Fuera de la FDTA, el magisterio —a quien no se incluye en sus reivindicaciones— y el movimiento universitario irán preparando el clima de movilización.

Pocos días antes del paro, la CTRP—Sur hará su primera aparición pública (según el comunicado, afirma contar con 9 federaciones y 80 sindicatos), condenando la naturaleza “política” y “contrarrevolucionaria” del paro, sin encontrar mayor eco. Es el Gobierno el que se moviliza a través de los sindicatos.

El paro se inicia el lunes 7 de mayo y concluye al finalizar la semana, el sábado 12. A través de él se demuestra la capacidad de paralización urbana y fabril en los primeros días, con intensas movilizaciones. El Gobierno, por su parte, muestra decisión al no ceder en los puntos principales y reprimir a los trabajadores en caso necesario. En medio de este clima, el Gobierno repite sus ofertas y va solucionando los problemas menores, a la vez que reprime con mayor fuerza al detener a dirigentes y ocupar los locales sindicales. Mientras tanto, la conducción de la huelga oscila entre el Ejecutivo de la FDTA y el Comando de Huelga, quienes pugnan por el liderazgo, ganando el sector pro-PCP y más cercano al Gobierno. La falta de unidad redundará en el fortalecimiento del Gobierno, quien hacia el fin de semana logra reactivar la ciudad, apoyado en el resguardo policial. Rota ya la principal arma de lucha, la FDTA sesiona y el Ejecutivo informa que el caso Cuentas "está cerrado", que en Cuajone se ha encontrado una solución a medias, y estando el resto de puntos resueltos, propone levantar el paro. Cuarenta y siete votos secundan esta moción. Veinte pugnan por la continuación y uno se abstiene: el Sindicato de Cuajone.¹⁹ El paro ha terminado pero el debate político prosigue.

Los días siguientes al paro de mayo serán objeto de mutuas recriminaciones entre el sector PCP y la Nueva Izquierda, quien en el paro mismo propuso sin resultados la formación de un Frente de Defensa por encima de la FDTA. La lucha interna es ya visible, ante la presión de las bases frente a problemas reivindicativos que el Gobierno no puede ya solucionar satisfactoriamente y obligado a recurrir a la fuerza, se va dando el enfrentamiento Gobierno-masas populares regionales, sobre la base de los organismos sindicales autónomos. Dificultad de negociación y presiones de las bases son el marco donde las dos líneas básicas del movimiento sindical se enfrentan. Una vez más, el problema será frente al Gobierno y la burguesía local se mantendrá un tanto al margen de un conflicto que no la enfrenta a ella directamente y en donde la lucha contra el Gobierno no le será indiferente, pero estará preocupada por el "ascenso clasista" y la politización de los sindicatos.

CONCLUSIONES

La trayectoria del movimiento popular urbano arequipeño, para el período octubre 1967 – mayo 1973, expresado a través de los paros generales, muestra cómo a medida que se va consolidando un polo de desarrollo industrial propio y sobre la base de la continuación de los avances sindicales observados en décadas anteriores, se gesta un nuevo desarrollo del movimiento social regional que pasa de tener un carácter frentista a uno de carácter popular.

A nivel regional, el movimiento popular arequipeño se convierte en el eje de la protesta social en 1967, secundando los otros movimientos las reivindicaciones de Arequipa. En 1972 y 1973 se da más bien una articulación entre el proletariado urbano y el proletariado minero del sur, indicio de un proceso que tiende a romper el aislamiento de las luchas de los obreros de las minas. Es entonces la dinámica del movimiento popular la que se presenta unida en la escena regional.

El “paro general” es la principal arma de lucha del movimiento social regional. Ello se explica por la necesidad de unir a todos los sectores, siendo los sindicalizados, el pivote, ante la escasa presencia sectorial de los sindicatos. También por ser el último recurso con que las regiones cuentan para “hacerse oír”, en tanto los poderes locales no tienen capacidad de decisión y por ser ésta una forma efectiva de presión política. Ello requiere que no sólo sea un paro fabril sino que el conjunto de la escena urbana esté paralizada.

El Estado utiliza como arma el centralismo político, al hacer a un lado determinadas reivindicaciones, cuando los representantes del Estado llegan a la región en conflicto, con argumentos como “no pertenecen a mi sector” o “no es de mi incumbencia”, buscando así anteponer como obstáculo la dificultad de acceder a los centros de toma de decisión. Trata también de separar las reivindicaciones como forma de ir quebrando la unidad lograda sobre la base de plataformas que recogen varios puntos a la vez.

Quadro 1

NUMERO DE TRABAJADORES SEGUN TIPO DE ORGANIZACION,
 PROVINCIA DE AREQUIPA E ISLAY
 1974

Tipo de organizaciones	No. de organizaciones	No. de integrantes
1. ORGANIZACIONES RURALES	54	6.557
- DL 19400	2	5.096
- No contemplados DL 19400		
2. ORGANIZACIONES LABORALES	270	46.837
- Sindicatos	133	10.825
- C.C.LL		
3. ORGANIZACIONES VECINALES	76	170.360
- Pueblos jóvenes	2	1.250
- U.P.I.S.	12	6.160
- Pueblos tradicionales		
4. ORGANIZACIONES JUVENILES	2	15.300
- Federaciones universitarias		
- Federación de Estudiantes Secundarios de Arequipa	1	11.200
- Clubes juveniles	258	6.450
5. ORGANIZACIONES PROFESIONALES	14	2.919
- Colegios y Asociaciones		

FUENTE:
 SINAMOS "Estudio de transferencia y participación", tomo X.
 OZAMS- Arequipa, 1974.

Quadro 2

TENDENCIAS POLITICO-SINDICALES
 DE LAS ORGANIZACIONES,
 A DICIEMBRE DE 1974,
 SEGUN CENTRALES

PROVINCIAS DE AREQUIPA E ISLAY

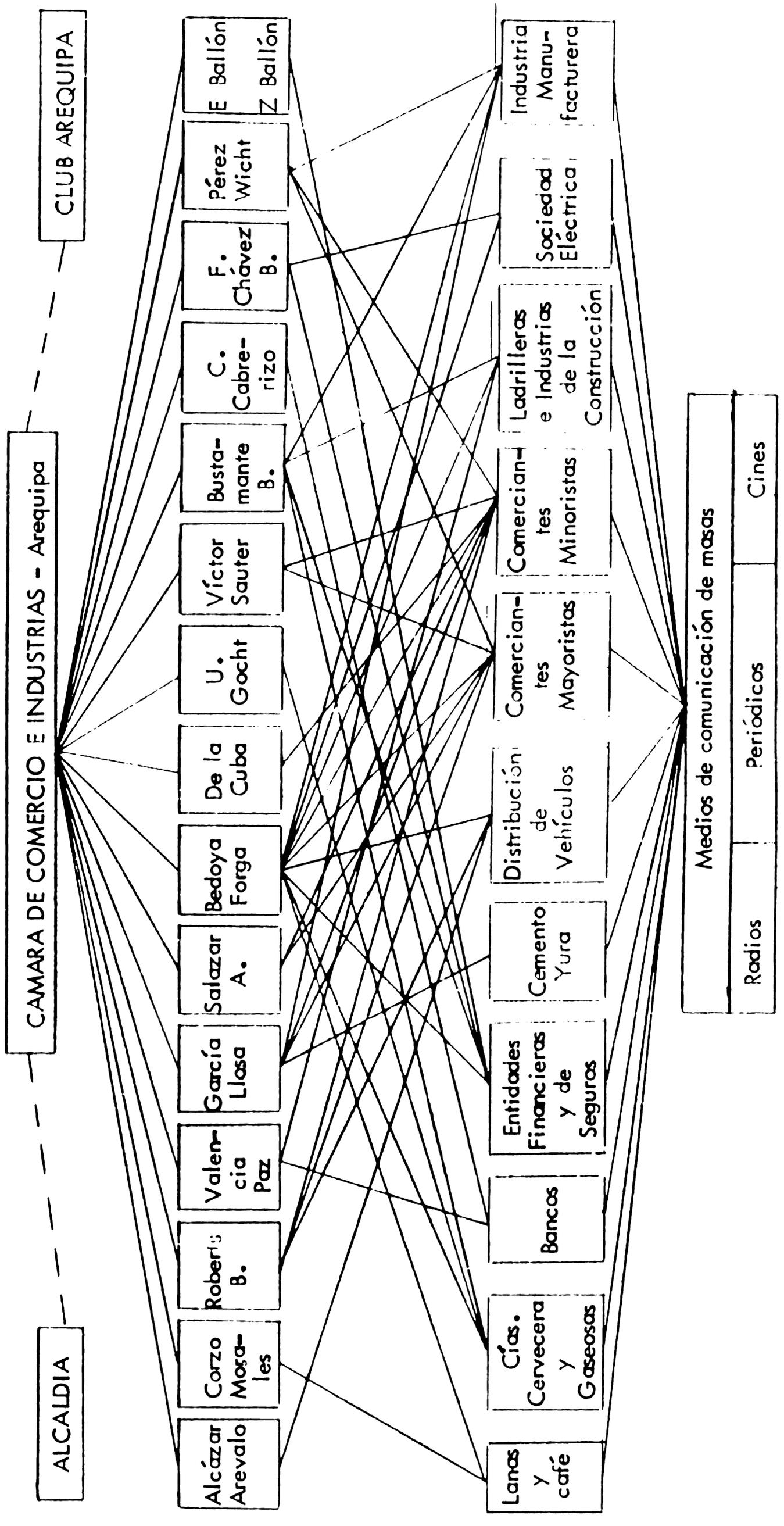
TENDENCIA	Agrario		Laboral	
	Organiz.	Miembros	Organiz.	Miembros
Revolución Peruana	48	5.775	107	14.802
Pro-C GTP	6	782	146	21.800
Pro-Ultra	-	-	6	4.060
Pro-Derecha	2	5.096	4	680
Independientes	-	-	7	5.495
No determin. 1	-	21.012	-	55.376
	56	32,665	270	102,213

1 Son sectores no organizados en el campo y la ciudad, según la PEA.

FUENTE
 SINAMOS, "Estudio de transferencia y participación", tomo X, OZAMR - Arequipa, 1974

Cuadro 3

GRUPOS DE PODER CAPITALISTAS Y TIPO DE UBICACION ECONOMICA



Fuente: SINAMOS, "Estudio de transferencia y participación", tomo X, OZAMS-Arequipa, 1974.

PAROS GENERALES EN AREQUIPA 1967 - 1973

AREQUIPA Paros Generales 1967/1973	Antecedentes	Entidad Organizativa	Plataforma reivindicativa (principales puntos)	Bases sociales	Fuerzas Políticas	Contenido político	Zona de impacto Hechos parciales	Nivel de representación/Mediana	Puntos obtenidos
1) Paro de FUDEPA 19-26 de octubre de 1967	- Devolución de art. 1967. - OS 010 del 13 oct. 1967. Aumento de remuneraciones en 100/a.	Frente de Defensa de la Economía Popular de Arequipa.	1) Reajuste de sueldos y salarios en relación al costo de vida. 2) Control de precios. 3) Descongel. remuneraciones empleadas pub.	Obreros, empleados pub., choferes, estudiantes, pueblo en general.	AP-DC; PCP; Nueva Izquierda; APRA.	Antigobernalista, antipermanente. Lucha por hegemonía sindical.	Regional: Cuzco-Puno-Mollendo-Juliaca en apoyo a Arequipa.	Restringida: control de movilizaciones y piquetas y barricadas. Suspensión de garantías.	Parcialmente punto 1, a nivel nacional.
2) Paro del 6-8 mayo de 1968.	DS 003 de multas e infracciones de tránsito.	Bloque interamericano.	1) Eliminación DS 003 que afecta a transportistas.	Bloque interamericano de gremios transportistas.	PCP. Nueva Izquierda.	Intento de dirigencia clasista de atacar bloques dominantes.	- Arequipa ciudad. - Líneas interprovinciales. - Paro nacional de la F. Ch. P. 19 al 23 de julio.	- Nula. - Mediación de Senador AP Lino Martínez.	Suspensión temporal del DS 003 a nivel nacional.
3) Paro General agosto 1968.	Aumento de gasolina al 25 de julio.	FDTA	1) Control alza costo de vida. 2) Apoyo a choferes. 3) Estabilidad laboral. 4) Libre sindicalización.	Choferes, Obreros.	PCP. Nueva Izquierda.	Acumulación de fuerzas del PCP a nivel sindical.	- Paro nacional de la F. Ch. P. 19 al 23 de julio.	- Represión selectiva a locales sindicales.	Suspensión de despidos y deslajo de GC de locales sindicales.
4) Paro General 7-10 abril de 1972	Despidos en Uchín en Cuzco en feb. 1972. Despidos y traslado del magisterio.	FDTA	1) Solución integral problema Cuzco y Uchín. 2) Reajuste. Derechos Tr. del ser. 3) SUTE: negociación y emul. traslado prefer.	Maestros, Mineros, Obreros, Universitarios.	Partido Rojo. PCP. POMR. APRA (CA de AI)	Lucha contra SPCC y a la vez contra el Gobierno R. de la F. A.	- Puno (ju. no 26) Moquegua	Comisión del Gobierno cede frente a negocio que se articulaba desde un primer plano.	Satisfacción mayor de puntos del pliego, salvo Cuzco a medida.
5) Paro General 7-12 mayo 1971	Muermientos pro-Biema en Cuzco y centros mineros desde marzo. Deportes a Cuzco.	FDTA	1) Reestructuración de Cuzco. 2) Solución problema Cuzco. 3) No al alza de salarios urbanos. 4) Estabilidad laboral de CIN. SUR y Zona Agraria IV	Maestros, Mineros, Obreros, Universitarios, Bancarios.	Ultras y PCP CNT	Lucha de Nueva Izquierda por impulsar el Paro de FDTA contra Johnson dirig. PCP	Moquegua y Puno en apoyo a Arequipa (10 de mayo).	Enfrentamientos GC-USE manifestantes. Suspensión de garantías. Detención de dirigentes.	Gobierno impone solución sobre Cuzco. Punto 4 resuelto. Cuzco no resuelto.
6) Paro General del CDFS 15-23 de noviembre 1971	Represión al SUTE. act. paro nec. del SUTE. Maestros arequipa en SEPA o subrogados.	Comité de Defensa del Frente Sindical y FDTA	CDFS: 1) Camp destrucción maestros por DL 20201. 2) Libertad de maestros desafiados. FDTA: 1) Solución al magisterio. 2) Suspensión vea. 3) Nuevo hospital. 4) Estabilidad laboral varios sindicatos.	Bancarios, Choferes, Maestros, Universitarios, Escuelas, Obreros, lab. Profesionales.	P. Rojo/DC PCP APRA?	Pugna PCP-Ultras en pleno asamblea. Enfrentamiento "educativo" con el Gobierno.	Puno, Moquegua y Tarma.	Represión selectiva y luego generalizada. Mediación CGTP	Solución a medida de problema magisterial. Puntos menores se negocian. Gobierno se impone.

NOTAS

1. Colque, Víctor, *Dinámica del movimiento sindical en Arequipa, 1900-1968*, Lima, publicación del Taller de Estudios Urbano-Industriales, PUC-CCSS, 1976.
2. En Arequipa colaboraron Alberto Villena, José Luis Hañari y Rosa Guillén. En Lima contamos con el apoyo de Mario Bermúdez.
3. Sulmont, Rochabrún y otros, *Bases para el estudio de los movimientos sociales urbano-populares*, Lima, PUC, Dpto. de CC.SS., 1977.
4. Mariátegui, J.C., *7 ensayos de interpretación de la realidad peruana*, sexto ensayo, Lima, Amauta, 1975.
5. Estos elementos de juicio permitirían explicar las rivalidades —que son parte del juego político local— entre Cusco y Arequipa, Juliaca y Puno, por ejemplo.
6. Sobre este problema de unidad y separación de las reivindicaciones locales y regionales véase *CADE 77: Empresa y desarrollo descentralizado*, donde la clase dominante cusqueña presiona al Estado para que se supere la situación de “olvido” del Sur oriente y media para satisfacer las reivindicaciones populares.
7. En las décadas del 50 y 60, Arequipa se destaca nítidamente. En la del 70, Cusco representa con más claridad el frente regional. Últimamente ciudades de la selva (Iquitos, Pucallpa) han entrado en esta dinámica.
8. Según un empresario local, era el “Ministerio de Hacienda” de Arequipa.
9. En la JRDA dirigentes sindicales serán incorporados formalmente como representantes populares, es el caso de Soza Peralta, caudillo del gremio ferrocarrilero.
10. Ver Colque, *op. cit.*, p. 97.
11. El dirigente máximo de FUDEPA sostenía que ellos enjuiciaron a la Célula Parlamentaria Arequipeña, pero no dejaron de reconocer los “actos de caballero” del Prefecto, alto dirigente populista arequipeño. Ello demuestra que aún no se habían roto relaciones con la clase dominante local.
12. En la Memoria de 1972, la CCIA va a afirmar que “el cambio no puede efectuarse a costa del desarrollo económico” y más adelante recogerá reivindicaciones regionales que encuentran ya poco eco a nivel popular: “La Cámara ha reiterado... la urgente necesidad de promover eficazmente la integración nacional a base de la aplicación de una verdadera política audaz y coherente, la descentralización económica y la desconcentración administrativa”, p. 2.
13. Un informe del SINAMOS, OZAMS Arequipa, dice al respecto:

“La capacidad de gestión política (de la CTRP-Sur) es aún reducida por la poca autocapacitación de la dirigencia, tanto en lo organizativo como político”. Sobre el SERP, surgido poco después, dirá que ha carecido de capacidad combativa, “por su composición mayoritaria de oportunistas y arribistas”.

14. Ello se revela a partir de Duharte, quien insiste en que la SNI ya no es más un gremio “limeño”, e incorporando a nivel del Directorio a representantes de provincias.

15. Este es un hecho interesante. Hay que tener en cuenta que los problemas sindicales de Cuajone no pertenecen a la jurisdicción de la FDTA, pero a pesar de ello se hacen suyas sus reivindicaciones, rompiendo de esa manera el aislamiento que pesa sobre los centros mineros.

16. Este hecho revela que por el problema del centralismo político, los paros son una forma de hacerse oír frente a un interlocutor distante que tratará de hacer valer su falta de presencia como un elemento para retardar o hacer a un lado los problemas.

17. En la Memoria de 1972, la CCIA, se ocupa más de los cambios estructurales que de los problemas laborales. Al respecto, escuetamente afirma, sin referirse al paro de abril, que: “en el aspecto laboral 1972 fue un año negativo en Arequipa, sobre todo como consecuencia del notable aumento de las huelgas y los conflictos en relación a 1971”, p. 15, op.cit.

18. Ver diario *El Pueblo*, 5 de abril de 1973.

19. Ver *Sindicatos* No. 3, órgano del CIPSI, UNSA, 1973, y *Socialismo*, órgano regional del PCP.